

Señor (a)

JUEZ(A) AMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA (Reparto)
E. S. D.

REFERENCIA : ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
DEMANDANTE : MARIO GERMAN AGUILAR MENDEZ
DEMANDADO : ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA- INSPECCION DE TRANSITO

LUISA FERNANDA RENDON ORTIZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.115.070.855 de Buga(V), abogada en ejercicio con tarjeta profesional no. 215.464 del C.S.J, actuando como apoderada especial del señor **MARIO GERMAN AGUILAR MENDEZ**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, de acuerdo al poder adjunto, acudo ante su despacho con el fin de presentar **ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** contra el **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA -SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE- INSPECCION DE TRANSITO-** con NIT 891.380.033-5, representado legalmente por el señor Alcalde Municipal Abogado **JULIAN ANDRES LATORRE HERRADA** o quien lo reemplace o haga sus veces, para que previos los trámites legales del proceso me sean concedidas las pretensiones incoadas en esta acción, previo lo siguiente:

I. PRETENSIONES

PRIMERO: Que se declare la nulidad de los actos administrativos No. STTM-2100-2015-606710 en la que se declaró la responsabilidad contravencional de tránsito de mi representado y la resolución No. STTM-2010-2015-06200 **“Por medio de la cual se suspende una licencia de conducción por embriaguez”** de fechas 10 de Julio de 2015 expedidos por el **Inspector de Tránsito Municipal**, por ser un acto ilegal expedido de forma irregular; con violación al derecho fundamental al debido proceso y derecho a la defensa, y con falsa motivación. No obstante de haber operado el fenómeno de **CADUCIDAD** de la facultad sancionatoria de la autoridad frente a la trasgresión de la normas de tránsito que se imputará, no existiendo fundamento legal.

SEGUNDO: Que de manera subsidiaria se declare la nulidad del acto administrativo No.STTM-2100-2015-13643 de 14 de diciembre de 2015 **“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSOS DE APELACION**, expedida por el **Secretario de tránsito Municipal de Guadalajara de Buga**

TERCERO: Que a título de restablecimiento del derecho, se solicita el levantamiento de la sanción impuesta consistente en multa equivalente a 720 SMLDV, es decir por valor de QUINCE MILLONES DIEZ MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 15.510.793.00) MCTE– más los intereses de mora causados-, y la suspensión de la licencia de conducción no. 76001-1830089 por el término de diez (10) años.

CUARTO: Que se decrete la suspensión provisional de los acto administrativo referidos en los numerales uno y dos de las pretensiones de la presente acción, y que se encuentra sustentado en el capítulo de medidas cautelares y en el capítulo de violación de normas, y en consecuencia se ordene la entrega provisional de la licencia de conducción no. 76001-1830089.

II. HECHOS Y OMISIONES

PRIMERO: El día 11 de enero de 2015, mi representado después de cumplir con su jornada laboral en la empresa Mac Pollo a eso de las 6 de la tarde se dirigió hacia un estadero ubicado en el corregimiento de presidente(Valle del Cauca), estando allá se tomó una cerveza y se quedó conversando con un amigo hasta las 9 de noche, de allí tomo rumbo

en su motocicleta hasta el municipio de Buga, cuando fue investido por la parte trasera de la motocicleta, por un vehículo fantasma en la carretera quedando totalmente inconsciente.

SEGUNDO: Después del siniestro, fue socorrido por un compañero suyo quien lo encontró en la carretera y llamo a una ambulancia, siendo traslado de manera inmediata a la Clínica Urgencias Médicas.

TERCERO: Durante la valoración médica se determinó que había sufrido un trauma craneoencefálico y otros traumas, razón por la cual fue dejado bajo observación médica en este centro hospitalario

CUARTO: Siendo aproximadamente las 5 a.m. del día 12 de enero de ese mismo año, se presentaron a la clínica miembros del cuerpo de carretera de la Policía Nacional, quienes le impusieron al señor **MARIO GERMAN AGUILAR** mediante procedimiento irregular, orden de comparendo no. 99999900002054058 bajo la codificación "F" que corresponde a **"CONducir BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (...)"** "con alcoholemia grado 3, de acuerdo al examen clínico (dictamen médico legal) realizado por el médico **FERNANDO ARCESIO GONZALEZ**.

QUINTO: Sin embargo, no tuvo en cuenta el galeno a la hora de realizar tal dictamen que ya habían transcurrido más de 6 horas desde la última ingesta de alcohol (a las 9 de la noche se presentó el accidente) hasta el momento que se le practicó tal examen, de acuerdo a la hora plasmada, en ese dictamen fue realizado a las 5:10 am, además de que no se realizaron pruebas paraclínicas complementarias para soportar la valoración, pues tampoco se tuvo en cuenta la delicada lesión craneoencefálica que sufrió a la hora de valorar la sintomatología para determinar el grado de alcoholemia, considerando de manera desproporcionada que mi representado presentaba grado 3 de alcoholemia.

SEXTO: No obstante, pese a la irregularidades presentadas en procedimiento técnico-operativo y en la práctica de la prueba de alcoholemia, también se presentaron irregularidades en el proceso sancionatorio, conculcándose de manera flagrante el debido proceso y derecho a la defensa y contradicción, pues no se ciñeron a las etapas procesales establecidas legal (ley 769 de 2002) y jurisprudencialmente como lo son: la notificación de la orden de comparendo, audiencia de descargos o presentación del inculpado, práctica de pruebas y alegatos de conclusión y finalmente la audiencia en la que se profiere el fallo y se interponen recursos. Debido a que solo se realizó una audiencia el día 09 de marzo de 2015 en la que mi defendido presentó su versión de los hechos, se recepcionó declaración juramentada a la señora **MIRIAM BEATRIZ MENDEZ** y se solicitaron práctica de pruebas, notificándose por estrado como fecha para la realización de estas el día 09 de Abril de 2015, la cual no se llevó a cabo, sin que se notificara una nueva fecha, toda vez que en sede de primera instancia se realizaron diligencias de ratificación de informe del policía de tránsito que elaboró la orden comparendal y se allegó por parte de la Clínica Urgencias Médicas un documento donde certificaba la idoneidad del médico que realizó el examen clínico, sin que se corriera traslado de estas, para que mi representado o quien fuese su abogada en esta causa, las controvertiera dentro del término legal oportuno, y solo se dieron a conocer después de proferido el fallo de primera instancia, además, en los oficios en que se citaban a declaración al médico y al S.I de la Policía CAÑAS, nunca se citó al señor Aguilar y a su apoderada con el fin, de que si era su voluntad poder interrogar a los declarantes y solicitar la respectiva aclaración del dictamen. No obstante, no solo se le vulneró el derecho a controvertir tales pruebas, sino que además no se le permitió aportar elementos probatorios, puesto que se realiza en la audiencia de práctica de pruebas, audiencia que como se mencionó anteriormente nunca se realizó y en la que pretendía entre otras aportar la historia clínica y exámenes, y presentar un dictamen por médico neurólogo, que permitiera desestimar la inadecuada valoración del médico perito.

SEPTIMO: Mediante Resolución STTM-2100-2015-05710 con fecha de Julio 10 de 2015, el Inspector de Tránsito y Tránsito JOSE LUCHO BONILLA, profirió fallo de primera instancia dentro del proceso contravencional referenciado, en la cual se declaró la responsabilidad contravencional de mi representado, notificándose este acto administrativo solo hasta el día 14 de julio de 2014, por medio de citación para notificación personal, cuando la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito y Transporte) en su artículo 139 establece que las notificaciones de las providencias que se dictan, se hará en estrados. Además que de los recursos se interpondrán y se sustentarán en la audiencia en que se profiera. Pues bien, en la parte final del referido acto administrativo, se puede evidenciar en un párrafo que señala: "En Guadalajara de Buga, hoy 14 de Julio de 2015, se deja

constancia que la presente providencia queda en firme y debidamente ejecutoriada". De acuerdo al artículo 142 de la multicitada norma de tránsito "...Toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su ejecutoria, no se ha interpuesto recurso alguno o éste ha sido negado...". Así las cosas, y de lo que se puede observar en el acto administrativo, es que al único que citan para la notificación personal de la referida Resolución es a mi defendido (cuya firma se encuentra plasmada en el acto administrativo), y no a su apoderada quien es la encargada de realizar la defensa técnica, tampoco se observa que le haya dado la oportunidad de presentar los recursos correspondientes que se deben interponer y sustentar en audiencia pública de fallo, pues solo se le entrego copias del multicitado fallo y de la resolución no. STTM-2010-2015-0622 del 10 de Julio de 2010 "por medio de la cual se suspende una licencia de conducción por embriaguez", advirtiéndole que tenía diez (10) días para presentar los recursos respectivos. Lo que no se le advirtió es que únicamente el recurso procedía sobre la resolución que suspendía la licencia la cual debe ser notificada de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (parágrafo artículo 26 ley 769 de 2002, modificado por la ley 1696 de 2013 art. 3) y no sobre la resolución principal que declara la responsabilidad contravencional del Señor **MARIO GERMAN AGUILAR MENDEZ**, pues esta se hace de manera subsidiaria cuando el inculpado no asiste a la audiencia de fallo, siendo ese el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre los aspectos contenidos en la providencia.

OCTAVO: A todo esto, se hace imperioso mencionar, que para la fecha en que se notificaron de manera personal los actos administrativos en mención, ya habían transcurrido 6 meses desde la imposición del comparendo, dando lugar a que operara el fenómeno de caducidad contenido en el artículo 161 de la normativa de tránsito, pues de acuerdo al cálculo aritmético la orden de comparendo se impuso el día 12 de enero de 2015, y la autoridad de tránsito tenía para celebrar la audiencia efectiva hasta el 12 de julio de ese mismo año. Vale la pena aclarar que se entiende como audiencia efectiva, aquella en la que se ha dado todo el trámite hasta definir la situación contravencional del presunto infractor, ya sea absolviendo o sancionado, y se haya presentado los recursos procedentes de acuerdo a lo contenido en los artículos 136 y 142 de la ley 769 de 2002 (modificado por la ley 1383 de 2010 art 24), siendo evidente que las resoluciones, tanto la que declara la responsabilidad contravencional, como la que suspende la licencia de conducción solo se notificaron hasta el 14 de Julio y la interposición del recurso de apelación se presentó solo hasta el día 29 de Julio de 2015 (término oportuno para la presentación del recurso teniendo en cuenta lo dispuesto para la notificación en el C.P.C.C.A), pero por fuera del término para interrumpir la caducidad.) Presentándose todas estas actuaciones por fuera del término establecido, operando de ostensible manera el fenómeno de **CADUCIDAD**

NOVENO: Por medio de Resolución no. STTM-2100-2015-13643 de fecha 14 diciembre de 2015, se resolvió recurso de apelación interpuesto por la que fuese su apoderada, en donde se confirmó en todas sus partes los actos administrativos multicitados, sin que la segunda instancia tuviera en cuenta las irregularidades presentadas en el procedimiento técnico-operativo y administrativo.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

NORMAS VIOLADAS

Con la expedición de los multicitados actos administrativos se infringieron las siguientes normas generando nulidades sustanciales y con consecuencias gravosas en la formación del acto final e incluso en los intereses y derechos del administrado:

Constitución Política: Artículos 24, 29, 209

Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito y Transporte): Artículos 135, 136, 139, 142, 161.

RESOLUCIÓN No. 001183 del 14 de Diciembre de 2005 del Instituto Colombiano de Medicina Legal (REGLAMENTO TÉCNICO FORENSE PARA LA DETERMINACIÓN CLÍNICA DEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ AGUDA) numeral 2.3.4 y numeral 3.4.4

CONCEPTO DE VIOLACION:

1. EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE FORMA IRREGULAR.

En la formación del acto administrativo se presentaron varias irregularidades tanto en el procedimiento técnico- operativo, que consistió en la obtención de la prueba principal – examen clínico de embriaguez-, como en la expedición de la orden de comparendo por parte del agente de la policía, así como irregularidades en el trámite contravencional, donde no se respetaron las formas propias de cada juicio, generando vicios de fondo y de forma en fallo.

*De lo narrado en libelo anterior, resulta más que evidente la flagrante violación por parte del Organismo de Tránsito de Buga (V) del derecho fundamental al **debido proceso** consagrado en el artículo 29 de nuestra carta magna, del cual se hace necesario analizar aspectos fundamentales de la conculcación a este precepto de orden constitucional.*

*“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.(...)Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso sin dilaciones; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso “*

“(…)El artículo 29 de la Carta ha establecido (i) un mandato general de aplicación del debido proceso en todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas; (ii) una obligación de respeto del principio de legalidad y, en consecuencia, la imposibilidad de juzgar los comportamientos de las personas con fundamento en disposiciones que no preexisten a sus actuaciones; (iii) un deber de respetar la competencia del juez natural; (iv) una obligación de adelantar los procedimientos acatando las reglas establecidas para cada uno de ellos; (v) una prohibición de presumir la responsabilidad de las personas y, en consecuencia, la obligación de las autoridades de asumir la carga de probarla; (vi) un mandato de asegurar que aquel que ha sido sindicado pueda defenderse y cuente además con un abogado durante las etapas de investigación y juzgamiento, (vii) la prohibición de procesos judiciales secretos o indefinidos; (viii) un deber de garantizar la posibilidad de presentar pruebas y de controvertir las que se aporten; y (ix) el derecho a impugnar las decisiones condenatorias. La Constitución prevé también en el artículo 31 (x) la posibilidad, en las condiciones en que ello sea definido por la ley, de apelar o consultar las sentencias, así como (xi) la prohibición de agravar la pena que se hubiere impuesto cuando se trata de un apelante único. Adicionalmente, en el artículo 33 (xii) consagra el derecho a no declarar contra sí mismo o contra los parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil(...) (subraya y negrilla fuera de texto)¹

En desarrollo de este principio constitucional inherente a todos los procesos y actuaciones de la función pública y administrativa, la Corte Constitucional ha establecido: “Para el desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizado un límite al poder del estado, en especial, respecto del ius puniendi de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos

¹CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-633 de 2014.

fundamentales, preservando por tanto “ el valor material de la Justicia” en armonía de con los artículo 1y 2 superiores”

Es tal la trascendencia de este precepto, en el cual el ciudadano tiene la facultad para hacer valer judicialmente la violación de sus derechos mediante el derecho público subjetivo de acción que goza de protección iusfundamental, que la Corte Constitucional se ha pronunciado innumerables veces respecto de la aplicación e interpretación de este principio como la máxima expresión del garantismo procesal.

“Como es sabido, el debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción”. En este sentido, el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como propósito específico “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)(...)”².

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto anteriormente, y los hechos planteados en el acápite que antecede, me permito sustentar bajo 3 presupuestos la vulneración al debido proceso dentro del trámite contravencional de Tránsito que se adelantara en mi contra:

2. VULNERACION AL DERECHO DE AUDIENCIA, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION

“(…) Ahora bien, uno de los derechos de mayor relevancia es el derecho de defensa. La Corte Constitucional en diferentes oportunidades se ha ocupado de establecer su alcance aludiendo a la fundamentación múltiple que tiene y a las diferentes formas en que puede materializarse. Así por ejemplo, en la sentencia C-025 de 2009, cuya síntesis da cuenta de la orientación de esta Corporación, señaló: Como es sabido, el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, haciendo extensiva su aplicación “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Siendo el derecho a la defensa la base del debido proceso, es clara su importancia dentro de un proceso judicial o administrativo se materializo de la siguiente manera:

² CORTE CONSTITUCIONAL, M.P GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Sentencia C-980-2010.

a. NO SE RESPETARON LAS FORMAS PROPIA DE CADA JUICIO.

“...La Corte se ha referido a este derecho, señalando que “lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia...”

De lo anterior es claro, que una de las formas de aplicación al debido proceso se encuentra la obligación de adelantar los procedimientos acatando las reglas establecidas para cada uno de ellos, como una forma de hacer prevalecer el derecho a la defensa, pues si bien como lo menciona la Corte Constitucional pese a que la norma que reconoce el derecho de defensa tiene un alto nivel de indeterminación, ello no implica que se encuentre desprovista de unos contenidos definidos que, por ser nucleares en la definición misma del derecho, siempre deben protegerse, de igual forma sucede en relación con el procedimiento contravencional de tránsito en cual se evidencia algunos vacíos que se prestan para la interpretación acomodada de los funcionarios del tránsito. No obstante, en tratándose de la práctica de la prueba alcoholemia se han establecidos algunos parámetros que son de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores de los alcohosensores o de los médicos peritos quienes deben de seguir al pie de la letra, so pena de incurrir en la obtención de una prueba ilegal carente de validez y nula de pleno derecho.

Al respecto, el Instituto de Medicina Legal, a través de la Resolución 1183 de 2005, expidió el REGLAMENTO TECNICO FORENSE PARA LA DETERMINACION DE LA EMBRIAGUEZ AGUDA. Donde Fija los parámetros para la práctica de las pruebas clínicas y paraclínicas para establecer la alcoholemia en los conductores. Estipula lo siguiente:

“(...) 2.3.4 La pertinencia del examen clínico para determinar embriaguez está sujeta al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos; por lo tanto se debe considerar este aspecto antes de iniciar la realización de la prueba. En términos generales, después de 4-6 horas se debe evaluar la utilidad de realizar examen clínico y/o efectuar pruebas paraclínicas, a criterio del médico y dentro del contexto del caso específico (...)”

“(...) 3.4.4 Si el examinado tuvo atención médica previa, considere los procedimientos médicos realizados que puedan incidir en la interpretación de los resultados (suministro de sustancias farmacológicamente activas, líquidos endovenosos, etc.).

Examen de Pacientes Hospitalizados

*Considere los procedimientos médicos realizados que puedan incidir en la interpretación de los resultados (suministro de sustancias psicofármacos o líquidos endovenosos; **si hay historia de trauma craneoencefálico** o de enfermedad metabólica **cuyos signos puedan ser equívocos con los de embriaguez**).*

Revise igualmente en la historia la presencia de signos de embriaguez y si se tomaron muestras para investigar sustancias de interés forense en el diagnóstico de embriaguez.

Si es procedente la toma de muestras por parte del perito, se debe informar previamente al personal del respectivo servicio de salud.

Adicionalmente, en todos los casos, registrar en la Historia Clínica correspondiente, una nota de constancia de la realización de la valoración forense, así como de la toma de muestras para análisis de laboratorio (...). Subraya y negrilla fuera de texto.

De acuerdo a lo manifestado por mi representado en la audiencia descargos del proceso contravencional, la hora aproximada en que presento el siniestro fue a eso de las 9 de la noche, y la hora en que se realizó el examen clínico fue a las 5:10 am. Habían transcurrido más de 6 horas, y aun así el médico realizó el examen clínico sin practicar pruebas paraclínicas complementaria, pese a que el señor MARIO GERMAN había presentado trauma cráneo encefálico severo –se deja como constancia en el dictamen- y otros traumatismos corporales que se evidencia en la historia clínica que se aportara al expediente, lo cual diagnosticar la embriaguez por medio de sintomatología resultaba

impertinente haciéndose necesario la práctica de la pruebas a través de otros medios. No obstante, según se evidencia en el expediente se requirió en 2 ocasiones al médico perito, para que aclara o complementara su dictamen y nunca compareció.

Por otro lado, en lo que concierne al proceso administrativo sancionatorio también se han fijado parámetro y etapas las cuales se encuentran dispuestas en los artículos 135, 136, 139, 142 de la multicitada normativa de tránsito y que han sido definidas por la Corte Constitucional en apartes jurisprudenciales, debiéndose desarrollar bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad³

“Artículo 135. Procedimiento. *Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:*

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo”.

“Artículo 136. *(...) Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decreta las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.*

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. *Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de la multa prevista en el código.” Subraya y negrilla fuera de texto.*

ARTÍCULO 139. NOTIFICACIÓN. *La notificación de las providencias que se dicten dentro del proceso se hará en estrados.*

ARTÍCULO 142. RECURSOS. *Contra las providencias que se dicten dentro del proceso procederán los recursos de reposición y apelación. El recurso de reposición procede contra los autos ante el mismo funcionario y deberá interponerse y sustentarse en la propia audiencia en la que se pronuncie.*

El recurso de apelación procede sólo contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia y deberá interponerse oralmente y sustentarse en la audiencia en que se profiera.

Toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su ejecutoria, no se ha interpuesto recurso alguno o éste ha sido negado.

Así, de las normas pertinentes del C.N.T.T., se desprende que el proceso contravencional por infracciones de tránsito, debe desarrollar cuatro etapas o momentos procesales fundamentales como lo son: la orden de comparendo, la presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley, la audiencia de pruebas y alegatos y la audiencia de fallo.⁴ De esta manera se hace más que evidente, que el procedimiento no se ciñó a lo señalado en los artículos antes enunciados, pues solo se realizó una audiencia, las demás diligencias no se realizaron en audiencia pública y se desarrollaron a espaldas de mi prohijado, la decisión tomada dentro del proceso, además de ser fundada, debió darse a conocer de manera verbal, dentro de la misma audiencia una vez con se haya concluido las

³ Artículo 137 ley 769 de 2002, parágrafo 1.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia T-616 de 2006. MP. JAIME ARAUJO RENTERIA.

intervenciones, entendiéndose notificada en estrado y contra el fallo proferido en audiencia solo procedía el recurso de apelación, el cual debía ser interpuesto en la misma diligencia y el fallo en que se notificó, de manera pues, que la oportunidad para interponer los respectivos recursos se concedieron de forma irregular, no respetando el ritual establecido para el caso en concreto, realizándose de manera extemporánea del término legal operando fenómeno de caducidad..

b. NO SE GARANTIZÓ LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y DE CONTROVERTIR LAS QUE SE APORTEN.

La Carta Política establece la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas, para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos que supongan una afectación directa de su situación jurídica, con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen, sino que, además, permita controvertirlos e impugnarlos a través de los correspondientes acciones y recursos.

Garantía que se vulneró, no solo al no realizar la audiencia de práctica de pruebas fijada para el día 09 de Abril de 2015, en la que la abogada del señor MARIO GERMAN, SANDRA PATRICIA ARANGO VALENCIA, pretendía hacer valer otras pruebas, sino que además el hecho de haber practicado pruebas testimoniales sin su presencia o sin que se le haya corrido traslado para controvertirlas.

c. SE PROFIRIO FALLO DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA PESE A QUE HABIA OPERADO EL FENOMENO DE CADUCIDAD.

A la luz del artículo 161 de la ley 769 de 2002, se consagra a figura de la caducidad así:

“La acción o contravención de las normas de tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la **celebración efectiva** de la audiencia. El no cumplimiento por parte del funcionario con este término será causal de mala conducta”. **Negrilla fuera de texto.**

En virtud de lo anterior, es necesario precisar, que en conceptos del Ministerio de Transporte, se define los parámetros de operancia de la caducidad, de manera que para que esta opere, debe de haber transcurrido seis meses de la ocurrencia de los hechos, sin que se haya proferido decisión o que esta no haya quedado en firme y ejecutoriada. En concepto no. 20101340236181 de fecha 28-06-2010 se señala:

“(…)Es importante precisar que la celebración efectiva de la audiencia de que trata el artículo 161 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, debe entenderse dentro del contexto o procedimiento descrito en los artículos 135 o 136 de la misma codificación (modificados por los artículos 22 y 24 de la ley 1383 de 2010, respectivamente), los cuales consagran la celebración de una audiencia pública en la que se practican las pruebas y se sancionará o absolverá sin justa causa comprobada dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de treinta (30) días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo fallándose en la audiencia pública y notificándose en estrados(…)”.

Por otro lado la dirección jurídica del Ministerio de Transporte, circular rad. 20154000245641 del 22 de julio de 2015. Realizó las siguientes aclaraciones a los organismos de tránsito y estableció los requisitos para que se de lugar a la caducidad y otros aspectos;

“(…) Esta prerrogativa que favorece al ciudadano, ha sido definida como la extinción del derecho de la acción por el transcurso del tiempo, cuando la administración o no opera o lo hace fuera de tiempo. Es de anotar que el legislador dispuso un término concreto para que se inicien

las acciones correspondientes, vencido el cual, las autoridades competentes no podrán hacerlo (...)

(...)Así las cosas, la caducidad opera cuando se presentan dos elementos: i) el paso del tiempo y ii) que no se hayan realizado los actos propios a cargo de la administración para determinar si hay lugar a la imposición de una sanción.

(...)Ahora bien, en los eventos en los cuales la autoridad de tránsito competente celebre **efectivamente la audiencia**, entendiendo por tal aquella en la cual comparece el presunto contraventor, se decreta o se solicite la práctica de pruebas conducentes, se práctica pruebas, se decide sobre la existencia o no de responsabilidad en la comisión de la conducta, se notifica en estrados la decisión, se interponen o no los recursos que procedan y en el caso de interposición se sustentan en la misma audiencia, se deberá entender que la caducidad en los procesos de única instancia queda interrumpida con la interposición, sustentación y resolución del recurso en la audiencia y en los procesos en los cuales proceda la doble instancia se deberá entender que la caducidad queda interrumpida con la interposición y sustentación del recurso ante la autoridad competente (...) subraya y negrilla fuera de texto.

De lo anterior, se hace imperioso anotar, que los procesos de naturaleza administrativa sancionatoria –como el disciplinario verbal y contravencional de tránsito- se tramitan en UNA SOLA AUDIENCIA la cual se podrá interrumpir o suspender las veces necesarias para efectos de prácticas de pruebas y fallo, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y economía que rigen la función administrativa. Sin embargo y pese a que estas audiencias se desarrollan de acuerdo a unas etapas o momentos procesales definidos por el legislador, no quiere decir, que pierda su unidad.

En lo que respecta a los procesos contravencionales de tránsito, por tratarse de un proceso abreviado y especial, la ley 769 de 2002 en el su artículo 136, determina que si fuera posible en la misma audiencia se practicaran las pruebas y se absolverá o sancionará al inculcado, en el caso en concreto, se puede observar como el organismo de tránsito en sede de primera instancia, tenía hasta el día 12 de Julio de 2015 para proferir la decisión en audiencia pública y ese mismo día si fuera el caso y previa notificación en estrados, conceder la oportunidad para presentar y sustentar la apelación, pero como sustentó en los anteriores apartes, la decisión solo se notificó y sin atender el procedimiento establecido, el día 14 de Julio de ese mismo año, transcurriendo 6 meses y 2 días, es decir, excedió los 6 meses que establece la norma para que opere la caducidad a la acción contravencional.

3. FALSA MOTIVACION.

Incorre en afirmaciones falsas en los actos administrativos, tanto en primera como en segunda instancia, al manifestar que no se aportaron elementos de juicio por parte del inculcado y de su apoderado respecto de la conducta objeto de reproche, ni muchos menos pruebas, que desvirtuaran las contenidas en el expedientes, pues como se reitera en el presente escrito, no se dieron oportunidades procesales para controvertir y presentar otras pruebas que se pretendían hacer valer, no obstante, si se presentaron elementos de juicio en las versiones, pues siempre se resaltó que el dictamen no se basó en la realidad de los hechos y que la experticia realizada presentaba anomalías.

I.V MEDIDAS CAUTELARES

1. SOLICITUD DE SUSPENSION PROVSIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

De conformidad con el análisis realizado en el acápite anterior, la simple confrontación de las resoluciones cuya suspensión se pide con las normas previamente citadas, se puede evidenciar de manera ostensible la violación de estas por parte de aquellos actos administrativos, que son normas superiores, constitucionales y legales.

Por tal razón, señor(a) Juez(a) le solicito se decrete como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos referidos en el acápite de las pretensiones, toda vez que con la retención preventiva y posteriormente con la suspensión de la licencia de conducción del señor AGUILAR, a través de un proceso plagado de irregularidades y nulidades, se ve perjudicado él y su familia pues los altos costos que debe de sufragar por concepto de transporte está conllevando a que se vea afectado su mínimo vital de subsistencia, teniendo que reemplazar otras necesidades básicas para suplir esta, como por ejemplo la recreación de su hija, puesto que con el salario mínimo que devenga apenas cuenta con lo indispensable para sobrevivir.

Elevo esta solicitud, en los términos del artículo 238 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 229 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Artículo 248 C. P: "La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establece la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial"

Artículo 229 C.P.A.C.A: procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

Artículo 230 C.P.A.C.A: Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

(...)

2. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se registrarán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.

Por el solo hecho de existir los actos acusados aparejan la presunción de veracidad y legalidad, y de ello se infiere que la sanción se impuso sin aplicar procedimiento previo alguno.

Las copias de dichas providencias y, en general, las demás pruebas pertinentes, se encuentran anexas en la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho siendo parte de la misma y se encuentran detalladas en el acápite respectivo

.

V. PARTES DENTRO DEL PROCESO

Demandada: Lo constituye el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA- SECRETARIA DE TRASNITO-INSPECCION DE TRANSITO MINICIPAL-, Entidad de orden municipal, representada por su Alcalde Municipal DR. JULIAN ANDRES LATORRE HERRADA o quien haga sus veces de conformidad con el artículo 159 del C.P.A.C. A.

Demandante: Lo es el señor MARIO GERMAN AGUILAR MENDEZ representado judicialmente por la suscrita de acuerdo con el poder que me ha conferido.

VI. CUANTIA.

Se estima razonadamente la cuantía por valor de QUINCE MILLONES DIEZ MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 15.510.793.00) MCTE, correspondiente

al valor total de la multa impuesta, más lo interés de mora que se hayan causado hasta la presentación de la demanda.

VII. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Es competente el JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUGA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 155 Numeral 2, Artículo 156 numeral 3, del nuevo C.P.A y C.A, demás normas concordante

A la presente demanda corresponde dársele el trámite del PROCESO ORDINARIO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO que tratan los artículos 179 y siguientes del nuevo C.P.A y C.A.

VIII. PRUEBAS

- a. *Copia simple de Orden de Comparendo No. 99999900002054058 de Enero 12 de 2015*
- b. *Copia simple del Dictamen del examen clínico por embriaguez, emitido por el medico FERANDO ARCESIO GONZALEZ.*
- c. *Copia simple de Acta audiencia pública del 09 de marzo de 2015, proceso contravencional no. 6001. Donde se recepciono versión libre al señor **MARIO GERMAN** y declaración juramentada de la señora **MIRIAM BEATRIZ MENDEZ AGUILAR**, se directan practica de pruebas solicitadas y se fija fecha para la reanudación de la audiencia.*
- d. *Copias simple de oficios STTM-2105-02870 de Junio 25 y STTM-2105-03015 de julio 06 de 2015, median el cual se cita al médico que realizo el dictamen del examen clínico por embriaguez, a diligencia de declaración juramentada.*
- e. *Copias simple de diligencia de declaración juramentada rendida por el señor S.I. De la Policía HECTOR FABIO CAÑAS, el día 07 de Julio de 2015.*
- f. *Copia simple de escrito de la clínica Urgencias Médicas de fecha julio 08 de 2015, donde se le informa el nombre completo de médico que dictaminó la supuesta embriaguez de mi defendido.*
- g. *Copia simple Resolución no. STTM-210-2015-06710 de fecha 10 de Julio de 2015, expedida por el Inspector de tránsito mediante la cual se declara la responsabilidad contravencional de mi representado.*
- h. *Copia simple Resolución no. STTM-2015-06200 de julio 10 de 2015 expedida por el Inspector de tránsito "POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE UNA LICENCIA DE CONDUCCION POR EMBRIAGUEZ"*
- i. *Copia simple del recurso de apelación presentado por la abogada SANDRA PATRICIA ARANGO frente a las resoluciones STTM-210-2015-06710 y STTM-2015-06200 de julio 10 de 2015 expedida por el Inspector de tránsito*
- j. *Copia simple Derecho de petición de fecha octubre 13 de 2015, por medio del cual se solicita se declare la caducidad del proceso contravencional.*
- k. *Copia simple de oficio STTM-2100-05604 de 12 de noviembre de 2015, por medio del cual se responde derecho de petición*
- l. *Copia Simple de resolución no .STTM-2100-2015-13643 del 14 de diciembre de 2015, "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN" expedido por el Secretario de tránsito y transporte municipal.*
- m. *Copia simple de Historia clínica del señor MARIO GERMAN AGUILAR.*
- n. *Copia de examen de electroencefalograma realizado al señor MARIO GERMAN AGUILAR MENDEZ, día 11 de febrero de 2015.*

Estos medios probatorios tiene como finalidad determinar los hechos narrados en el presente escrito, así como constatar las actuaciones procesales que se surtieron dentro del trámite del referido proceso contravencional, dentro del cual se prohirieron los actos administrativos aquí demandados.

IX. ANEXOS

1. Los documentos enunciados en el acápite anterior
2. Poder especial amplio y suficiente, legalmente conferido
3. Copia de notificación acto administrativo
4. Acta de conciliación
5. Copias de la demanda para el traslado a la demandada, archivo, Procuraduría, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y copia en medio magnético.

X. NOTIFICACION DE LAS PARTES.

La demandante recibe las notificaciones en la carrera 14 B no. 28-09 B/ La Honda, Guadalajara de Buga. Celular 318 7319704.

La suscrita apoderada recibirá las notificaciones en la calle 1 DN 21-67 del municipio de Buga-Valle. Teléfono 3146970900, email: luisarendon_04@hotmail.com

La demandada en la carrera 13. No. 6-50, teléfono 2370700. Correo electrónico.[contactenos@guadalajara debuga-valle.gov.co](mailto:contactenos@guadalajara-debuga-valle.gov.co)

El Señor Agente del Ministerio Público en la secretaria de su despacho o en la dirección que el suministre.

Del (la) señor(a) Juez(a);

Atentamente,

LUISA FERNANDA RENDON ORTIZ
CC. 1.115.070.855 de Buga
T.P 215.464 del C.S.J